Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)
Documento de Trabajo 01-02

Tiempos del golpismo latinoamericano

Ludolfo Paramio

Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)

Las intervenciones militares en América Latina han sido a menudo una consecuencia de la insatisfacción de los actores sociales y políticos ante los gobiernos o los resultados electorales. La dimensión exterior, y en concreto la influencia norteamericana, comienza a ser decisiva durante el período de polarización ideológica que sigue a la revolución cubana. El nuevo giro de la política exterior norteamericana, durante la administración Carter, y las terribles consecuencias de las guerras civiles y violaciones de los derechos humanos, han creado durante los últimos años un clima político y social claramente opuesto a nuevas intervenciones militares.

Military interventions in Latin American politics had been often requested by political and social actors, unsatisfied with electoral or governmental results. After the Cuban revolution the foreign dimension acquires a new relevance, as ideological polarization inside many countries increases the US influence on Latin American armies. After a new change in Washington's Latin American policy, during the Carter administration, and the devastating effects of civil wars and violations of human rights, in the last years the social and political climate has been clearly opposite to new military interventions.

Introducción: enfoques

En la literatura y los medios de comunicación ha existido a lo largo de este siglo un arraigado estereotipo sobre la debilidad de los gobiernos civiles frente a los militares en América Latina. El tópico tenía incluso ciertas connotaciones humorísticas, que cayeron rápidamente en desuso cuando a mediados de los años setenta se extendieron por el Cono Sur dictaduras militares de rasgos especialmente crueles y sangrientos, desde Chile (1973) hasta Argentina (1976), pasando por Uruguay.

Así como en el caso argentino la intervención de los militares en la política era un hecho recurrente desde 1930, tanto Chile como Uruguay se venían considerando hasta ese momento casos ejemplares de estabilidad del poder civil democrático. Además, la situación en el resto de la región no era más positiva: con la excepción de Colombia, Venezuela y Costa Rica, los restantes gobiernos eran claramente autoritarios, aunque en el caso mexicano se trataba de un régimen indudablemente civil e inclasificable.

Quizá por ello en esos años se extendió un clima bastante negativo en los medios académicos sobre la viabilidad de la democracia en América Latina. En algunos casos el pesimismo se sustentaba sobre el subdesarrollo económico de los países afectados, siguiendo el esquema clásico de Lipset (1959) sobre la correlación entre democracia y desarrollo, pero era bastante evidente que esta explicación resultaba forzada o inaplicable para dar cuenta de la activa presencia de los militares en la política argentina desde una época en que este país era uno de los más desarrollados de la región y del mundo.

La teoría de la dependencia, muy influyente desde los años sesenta en los estudios de

América Latina (Frank, 1967, 1969), ofrecía una aparente alternativa al introducir la relación exterior con las metrópolis desarrolladas como explicación a la vez de las barreras que encontraba el desarrollo latinoamericano y de la fragilidad de la democracia, ya que las fuerzas armadas pasaban a ser vistas como prolongaciones del Estado metropolitano, encargadas por tanto de frenar a cualquier gobierno que pusiera en peligro sus intereses. Desde este punto de vista la fragilidad de la democracia no sería fruto de unas condiciones estructurales adversas, sino de la acción intencional de unos actores (externos) que trataban de perpetuar la dependencia en beneficio propio.

No era fácil, sin embargo, negar la importancia de los factores internos. Por ello se planteó el modelo del autoritarismo burocrático (O'Donnell, 1972), acuñado a partir de la experiencia brasileña, que atribuía el auge del autoritarismo a las exigencias del modelo de industrialización sustitutivo de importaciones una vez agotada su fase fácil (de sustitución de bienes de consumo). La necesidad de incrementar el ahorro y la inversión para abordar una nueva fase de acumulación implicaba la exigencia de regímenes autoritarios que impusieran a los trabajadores y a las clases medias una fuerte reducción de su nivel de vida.

Y por supuesto sobrevivía la explicación cultural, particularmente presente en Estados Unidos dentro de los llamados estudios de área: la herencia de la cultura medieval ibérica sería la raíz de la fragilidad de las instituciones democráticas de gobierno y del retraso económico (véanse Wiarda, 1974, y Wiarda y Kline, 1979). Desde esta perspectiva se subrayaba que las tradiciones y los valores poseen una larga inercia, y que no desaparecen automáticamente dentro de los procesos de modernización —algo que podría asimilarse actualmente sin problemas desde un enfoque neoinstitucionalista—, pero se les atribuía una eficiencia causal probablemente más discutible.

Paradójicamente, en el mismo momento en que la ola de autoritarismo militar parecía haber llegado a su punto más alto, comenzaba ya el proceso de su declinación, con el regreso del poder a los civiles en Ecuador (1979) y Perú (1980). La década siguiente sería la de las transiciones a la democracia en América Latina, no sólo en América del Sur sino también en América Central, pese a que en esta última subregión las circunstancias de guerra civil y el fuerte peso de los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos no permitían prever —al menos desde la perspectiva de la teoría de la dependencia— semejante evolución.

Ciertamente no se puede afirmar que la generalización de la democracia sea ya un fenómeno irreversible en América Latina. Se puede admitir incluso la tesis de que no existen democracias consolidadas, sino simplemente democracias que duran (O'Donnell, 1996), pero además cabe señalar que algunas democracias latinoamericanas parecen actualmente frágiles (Venezuela, Colombia o Ecuador), que Perú ha atravesado una larga experiencia semiautoritaria desde el autogolpe de Fujimori en 1992 hasta su exilio a Japón en noviembre de 2000, y que en México sólo en este mismo año 2000 se ha producido por primera vez la alternancia en el gobierno federal con la elección de un presidente ajeno al PRI. Aun así, los últimos veinte años han sido un tiempo de democracia y gobierno civil, y eso exige una reflexión al valorar la historia de las intervenciones militares en la política latinoamericana.

Un hecho particular puede revelar la clave del análisis. En 1992 el gobierno de Carlos Andrés Pérez sufrió dos intentos de golpe militar. Ambos fracasaron, pero tras la presidencia de Rafael Caldera triunfó arrolladoramente en las elecciones de diciembre de 1998 el líder golpista Hugo Chávez. A golpe de plebiscito Chávez ha introducido una nueva Constitución y ha desmantelado las instituciones anteriores, pero sustituyéndolas por otras que, al menos en principio, cumplen con los requisitos del gobierno democrático. Y aunque

su mensaje de soberanía y sus relaciones internacionales desafían claramente la política exterior norteamericana, tanto el Departamento de Estado durante la presidencia de Clinton como el propio Chávez han tratado de evitar una confrontación.

Lo que podría revelar el caso venezolano es que la opinión internacional y la política de Washington han sido desde los años ochenta los principales factores que han inhibido las tentaciones golpistas en América Latina. Los golpes fallidos habían contado con algo que podríamos llamar tolerancia por parte de la opinión pública (Myers y O'Connor, 1998), y la victoria de Chávez no sólo revela su popularidad sino una tremenda insatisfacción social frente a los partidos políticos y la política tradicional. Por tanto, lo que sugiere el hecho de que Chávez se haya atenido a la lógica de la democracia como forma de gobierno —al menos en sus dos primeros años— es algo así como una teoría de la dependencia invertida: en la medida en que no sólo contaban los factores internos, sino que pesaban considerablemente los externos, no triunfó el golpismo pero se produjo un colapso y refundación plebiscitaria del régimen político.

Esto implica que la dimensión internacional puede tener un peso decisivo, pero no sólo contra la estabilidad del gobierno civil, sino también a su favor. Y desde este punto de partida es preciso al menos considerar cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo esa dimensión internacional, o, más simplemente, qué cambios en la política exterior norteamericana deben tomarse en cuenta para comprender la mayor o menor probabilidad de intervenciones militares en la vida política latinoamericana. Pero a la vez es evidente que hay que tomar en cuenta factores internos. Puede suceder que un golpe militar sea simplemente consecuencia de una voluntad externa de ingerencia, pero para que se produzca será necesario que exista un actor militar (nacional) dispuesto a derrocar el gobierno establecido.

Por tanto hay que analizar cuáles son las razones que pueden llevar a una parte de las fuerzas armadas a juzgar necesaria o conveniente esa intervención. Entre los factores que pueden ser decisivos en este sentido estará la percepción de una escasa o deteriorada legitimidad del gobierno preexistente, y la existencia de una conformidad —o incluso una demanda— por parte de sectores sociales significativos ante la posibilidad de esa intervención. Pues, independientemente de los beneficios que el actor militar espere obtener con su actuación, también deberá tomar en cuenta los costes previsibles de la intervención, que serán mayores cuanto mayor sea la legitimidad del gobierno al que se enfrenta.

Partiendo de estas consideraciones se puede plantear un esquema cronológico simple para la dimensión internacional, diferenciando ante todo entre el tiempo anterior y el posterior a la segunda guerra mundial, e introducir una tipología de situaciones internas que pueden explicar la recurrencia o la ausencia de intervenciones militares en la política. En esta tipología los elementos a considerar serán el proceso de construcción del Estado, el desarrollo de las fuerzas armadas como institución estatal, y la capacidad del sistema político para generar consenso social, en el doble sentido de ser visto como efectivamente representativo de los intereses y eficaz en la satisfacción de las demandas sociales.

Hasta la segunda guerra mundial: las fuerzas armadas y la trasformación del Estado

La hegemonía de Estados Unidos en las relaciones internacionales de América Latina no se produce hasta después de la segunda guerra mundial. Por tanto en este período, y en especial en la década de los treinta, durante la cual se suceden las interrupciones militares del orden político, no parece lógico otorgar un papel decisivo a la dimensión internacional, y

sí lo es, en cambio, centrarse en los factores internos. Y, dentro de ellos, la clave es la transformación del Estado, en un proceso cuyas dimensiones centrales para el análisis son la ampliación del régimen político y la profesionalización de las fuerzas armadas.

Es necesario, sin embargo, recordar que el tiempo de la transformación del Estado era bien distinto en Nicaragua y los países del Caribe, que hasta los años treinta atraviesan por fases de ocupación por las tropas de Estados Unidos, en aplicación de la doctrina Monroe —en la más drástica versión de Teddy Roosevelt—, ante la debilidad o el colapso de sus instituciones estatales (Rouquié, 1994: 236). De esa historia inicial se derivarían dictaduras personales que pueden ser caracterizadas como regímenes sultanísticos, según la terminología que Linz toma de Weber (Linz, 2000): regímenes autoritarios depredadores y personalizados, en los que no existe límite entre lo público y el patrimonio del gobernante y su familia, como los de los Somoza, Batista, Trujillo y Duvalier.

En los restantes países se puede considerar que el factor decisivo para la irrupción de los militares en política es la crisis de crecimiento que atraviesa el Estado, como consecuencia de los cambios económicos y sociales inducidos por el período de crecimiento impulsado por el comercio exportador. La navegación a vapor y el desarrollo de los frigoríficos convierten a las exportaciones latinoamericanas de productos primarios en un elemento sustancial del desarrollo industrial europeo, permitiendo por ejemplo un abaratamiento y ampliación de la oferta de alimentos que puede haber permitido una mejora del poder adquisitivo de los salarios en Europa incluso durante la crisis de 1870 a 1890.

Ese comercio exportador tiene a su vez una profunda repercusión en América Latina. No sólo crece una clase trabajadora vinculada a la construcción y el ferrocarril, sino que se afianzan unas clases medias urbanas en torno al comercio, la administración y los servicios. Una de las consecuencias es que en torno a la primera guerra mundial crecen las demandas de ampliación de la participación política por parte de esas clases medias. Los partidos políticos tradicionales deben plantearse la inclusión de nuevas capas sociales y se enfrentan a una creciente dificultad para manipular el sufragio. Se abre así una crisis de la representación política en su dimensión inclusiva (Dahl, 1971), que a la vez afecta a su funcionamiento anterior en la dimensión competitiva.

Puede advertirse que no era una crisis menor recordando que fue el detonante de la Revolución mexicana de 1910. En general plantea un problema de adaptación de las instituciones políticas a una situación nueva, de entrada de nuevos actores y demandas, según el conocido esquema de Huntington (1968). El factor específico de los años veinte es la aparición entre estos nuevos actores de la oficialidad joven de los ejércitos, como fruto del propio proceso de profesionalización de los ejércitos que se completa también en torno a la primera guerra mundial (Rouquié, 1982: 85-113). Con esa profesionalización cambian el origen social y las relaciones de la oficialidad con el resto de la sociedad, y este cambio afecta a su conciencia sobre el papel de la institución militar respecto a la sociedad y dentro del Estado, según un proceso que ha sido bastante estudiado (Huntington, 1957; Finer, 1962, 1975; Abrahamsson, 1972).

En América Latina, la primera guerra mundial tiene además su propio impacto dentro de las fuerzas armadas. La profesionalización ha ido acompañada del establecimiento de relaciones estrechas con los ejércitos europeos, en particular el prusiano y el francés, a los que se recurre para la organización de las academias militares nacionales. Y durante la guerra viajan a Europa misiones militares que siguen sobre el terreno las innovaciones tácticas y estratégicas introducidas por los contendientes. El mensaje que estas experiencias transmiten a los nuevos ejércitos latinoamericanos es muy preocupante: sus recursos humanos y materiales son completamente inadecuados para asegurar la defensa del territorio nacional —especialmente en los países más grandes—, y esto a su vez es

consecuencia tanto de su insuficiente peso dentro del Estado como de la ausencia de industria nacional para garantizarles el armamento necesario.

Es así como en la década de los veinte surgen movimientos de oficiales —como los *tenentes* brasileños o los componentes del Comité Militar Revolucionario chileno— que expresan en el lenguaje de la época, y con fuertes ambigüedades y contradicciones ideológicas, su inquietud ante el subdesarrollo del Estado en sus países. Sus propuestas varían, especialmente en lo que se refiere al problema social y al papel que otorgan al movimiento obrero —cuestión en la que sus simpatías oscilan entre el socialismo y el fascismo ascendente—, pero coinciden en criticar la miopía de los políticos tradicionales y en exigir un fortalecimiento del Estado, y dentro de él un peso mayor para las fuerzas armadas.

Independientemente de que la psicología de los militares profesionales y los rasgos de su organización institucional favorezcan o no la pretensión de sustituir la deliberación política por los mecanismos y recursos de decisión vertical propios del ejército, lo cierto es que la crisis de adaptación de los regímenes políticos durante los años veinte abre evidentes oportunidades a la acción de actores nuevos dentro del Estado, especialmente cuando éstos cuentan con recursos coactivos. En sociedades en las que los valores democráticos no son universalmente compartidos —porque la participación política no es universal, y está deformada por la recurrencia del fraude—, la pretensión militar de asumir el interés general, frente a los particularismos y divisiones de los políticos tradicionales, puede gozar de una fuerte credibilidad. Bastará con que se extienda un sentimiento de crisis institucional para que cristalice la oportunidad para la intervención militar.

Y ese sentimiento podía surgir fácilmente en unos años marcados por los problemas de ampliación del régimen político. Cuando esta ampliación se traduce en la entrada de nuevos gobernantes —como Yrigoyen en Argentina—, a la insatisfacción que puedan crear sus políticas se sumará el rechazo por los grupos dominantes de su gobierno como ilegítimo, tanto por suponer el desplazamiento de sus representantes tradicionales como por apoyarse en la movilización plebeya. Y si, a la inversa, no se produce ampliación o ésta no se traduce en la aparición de nuevos gobernantes, las demandas acumuladas supondrán un reto creciente a la legitimidad de los gobernantes tradicionales.

Para que no faltara nada, la crisis del 29 puso brusco fin al período de crecimiento exportador. Aunque el impacto social de la crisis subsiguiente parece haber sido bastante menor que el de la crisis de la deuda en los años ochenta (Thorp, comp., 1984), su efecto desarticulador y creador de malestar fue sin duda muy considerable, acrecentando las oportunidades de intervención militar. Pero no conviene generalizar y pensar que fue la crisis del 29 lo que llevó a los militares a intervenir en política. La revolución del 30 en Brasil ni se ajusta a la definición de golpe militar ni fue consecuencia de la crisis económica; las intervenciones militares en la política chilena comienzan en 1924, en la secuela de la crisis del salitre, que anticipa en Chile los efectos que la crisis del 29 produjo en otros países de la región.

Se podría decir que el golpe argentino de septiembre de 1930 resume todos los rasgos apuntados. El segundo gobierno de Yrigoyen afronta una seria crisis de legitimidad, fruto de su parálisis —en parte como resultado de la enfermedad del presidente y de la pugna interna por la sucesión—, de la gravedad de la situación económica y de la feroz ofensiva de la oposición contra el gobierno, crisis que se traduce en los pésimos resultados que obtiene el partido radical en las elecciones parlamentarias de marzo de 1930. Pero los dirigentes militares no poseen un proyecto único de actuación al tomar el poder.

El teniente general José F. Uriburu, que encabeza el golpe, posee un discurso de influencia

fascista, que apunta en una dirección nacionalista alejada del liberalismo económico de la clase dominante tradicional. Pero otro sector, triunfador dos años después, busca simplemente la restauración en el poder de esas clases y de sus intereses, frente al caos plebeyo que habría engendrado el radicalismo. El general Agustín P. Justo, que tomaría el poder en 1932 en nombre de este sector, plasmaría en el acuerdo Roca-Runciman de 1933, con Inglaterra, la apuesta de su gobierno por los sectores exportadores ganaderos, a los que aseguraba el mercado británico a costa de compromisos cuyos efectos para el conjunto de la economía resultan considerablemente polémicos aún hoy.

Esa división dentro del ejército no sólo revela las ambigüedades y contradicciones ideológicas de los nuevos oficiales, sino también la fuerte persistencia dentro del ejército de sectores vinculados a los intereses tradicionales: las inquietudes modernizadoras no son un rasgo general de los oficiales profesionales, sino que dentro de ellos siguen muy presentes la cultura y los intereses de clase propios de las fuerzas armadas no profesionales del siglo anterior. Y esa dualidad, en el caso argentino, se mantendrá a lo largo de buena parte del siglo, y se hará patente en el golpe militar que pone fin al gobierno de Perón en 1955, tanto como en el fallido intento previo de anularlo en octubre de 1945, que daría origen a su leyenda y a su poder durante una década.

De la segunda guerra mundial a la polarización ideológica

Desde la perspectiva actual —o, mejor, desde la perspectiva que hemos heredado de los años setenta— resulta fácil creer que la hegemonía norteamericana en la región, después de la segunda guerra mundial, se tradujo de forma inmediata en un protagonismo de Washington en las actuaciones militares en los distintos países de América Latina. Se trataría nuevamente de una simplificación: fue la revolución cubana, con su mensaje insurreccional a la izquierda latinoamericana, lo que creó las condiciones para esa estrecha colaboración y complicidad entre los ejércitos de la región y el ejército norteamericano, en un contexto en el que los conflictos sociales y la oposición política pasaron a formar parte de la agenda de la seguridad nacional.

Previamente las presiones diplomáticas sobre los gobiernos de la región podían ser fuertes, pero sin ir acompañadas normalmente de acciones de fuerza impulsadas por Washington. La renuncia de Vargas a la reelección, la salida del PC del gobierno del Frente Popular chileno, o los fallidos esfuerzos del embajador Braden contra Perón en 1945 y 1946, podrían considerarse la norma. En cambio la invasión de Guatemala desde Honduras en 1954, para poner fin al régimen de Jacobo Arbenz, aunque claramente una iniciativa norteamericana, no contaba con el respaldo inicial del ejército guatemalteco (Dunkerley, 1990: 228), y sería más bien una reedición de las anteriores intervenciones directas del ejército norteamericano, en México y Centroamérica, en defensa de los intereses de empresas de aquel país (en este caso la United Fruit).

Probablemente es 1964, con el golpe militar brasileño, el momento que marca el ascenso decisivo de la influencia norteamericana en las actuaciones militares de la región. Pero este golpe, que pone fin a la presidencia de João Goulart —heredero del populismo de Vargas, llegado de forma inesperada a la presidencia en 1961 tras la renuncia de Jânio Quadros—, es también un ejemplo de una tradición anterior de intervenciones militares producidas por causas políticas internas, asociadas no tanto al peligro de colapso o desbordamiento revolucionario del régimen político como a la utilización del recurso militar por las fuerzas políticas o los grupos sociales en contra de situaciones desfavorables percibidas además como ilegítimas.

El sentimiento de desorden social que precede al golpe de 1964 tenía bases muy reales a causa del impulso del presidente Goulart a la mobilización y radicalización de sus seguidores, pero no parece que la inquietud y el malestar ante el desorden —patentes en la jerarquía militar a causa de la revuelta de los sargentos— se correspondieran con la existencia de un verdadero proceso revolucionario. Antes que el riesgo de colapso político, la motivación de los sectores sociales que apoyan el golpe parece haber sido poner fin a un gobierno cuyas actuaciones provocan un clima de caos, y secundariamente a un régimen que no expresa sus intereses. En este sentido se podría decir que estos sectores cortejan al ejército para corregir una situación política inaceptable para ellos, no para evitar un riesgo revolucionario.

Lo que es nuevo en el golpe de 1964 son los rasgos ideológicos del sector del ejército que lo lleva a cabo, la llamada corriente democrática. Se trata de una corriente *atlantista*, influida por los oficiales que participaron en la segunda guerra mundial —dentro de la fuerza expedicionaria que había combatido junto con el IV Cuerpo de Ejército norteamericano en la campaña de Italia—, opuestos a los planteamientos nacionalistas del *getulismo*, y a los que la lógica de la guerra fría ha llevado a formular en la Escola Superior de Guerra la doctrina de la seguridad nacional, vinculando desarrollo y seguridad y asumiendo como tarea del ejército la definición de los grandes objetivos nacionales (Rouquié, 1994: 252).

Explicar el golpe por las necesidades del desarrollo industrial, que impondría la necesidad de reducir el poder adquisitivo de los salarios para hacer posible una mayor acumulación de capital —en la línea del modelo de autoritarismo burocrático de O'Donnell (1972)— puede resultar un tanto forzado: probablemente el detonante del golpe fue el sentimiento social de caos e ingobernabilidad. Pero el nuevo régimen, en teoría liberal y prodemocrático —por su oposición a la herencia del populismo autoritario de Getulio Vargas—, no sólo crea efectivamente las condiciones para una nueva fase de acumulación, imponiendo fuertes reducciones salariales y reprimiendo las protestas y la movilización social —en especial tras el Acta Institucional nº 5, de 1968, que da plenos poderes al presidente—, sino que además asume un papel decisivo para el Estado en la modernización económica.

A simple vista se trata de una espectacular paradoja: el sector del ejército más próximo a los Estados Unidos, y enfrentado al legado del Estado populista de Vargas, emprende un proceso de fortalecimiento del Estado y del gobierno federal comparable al realizado por aquél tras la revolución de 1930 y durante el *Estado novo* (1937-45), y convierte al Estado en eje de la nueva fase de desarrollo económico. La paradoja es menor si recordamos el contexto de la época, muy diferente del actual. En un texto que pretendía ser *un manifiesto no comunista*, y que se considera representativo de las ideas de la administración Kennedy, Rostow (1960) atribuía a la acción estatal un papel central en el desarrollo económico, considerando que éste era a su vez la condición para evitar el ascenso de la izquierda revolucionaria.

Así, la orientación pronorteamericana de los militares brasileños, en el marco de las ideas establecidas durante la guerra fría, no sólo llevan al régimen a reprimir a la izquierda, sino también a una efectiva dinámica de modernización e impulso al desarrollo económico desde el Estado. De hecho en la década de los ochenta Brasil conseguiría hacer frente a la crisis de la deuda gracias a su tremenda capacidad exportadora, y el propio endeudamiento fue consecuencia de la voluntad política de mantener el ritmo de crecimiento —en el contexto de las dos crisis del petróleo, que afectaron duramente a Brasil como país importador— para intentar frenar la pérdida de legitimidad del régimen perceptible desde las elecciones de 1974.

Pues ésta es la segunda paradoja del régimen brasileño: el mantenimiento de una continuidad de las instituciones democráticas —incluyendo elecciones— bajo el poder

presidencial militar. Así, desde la presidencia de Geisel (1974-78) comienza un proceso de *descompresión* política, en el que el gobierno trata de retener la iniciativa cambiando las normas electorales y recurriendo a la ingeniería institucional, hasta que en 1982, tras alcanzar la oposición la mayoría de la Cámara y el gobierno de diez de los 23 estados, se inicia el camino que desembocará en la transición de 1985. La elección de Tancredo Neves —que muere antes de tomar posesión— y la llegada a la presidencia del candidato a la vicepresidencia, José Sarney, cierran un proceso de veinte años que, por sus características y sus resultados, no tiene paralelismo en América Latina.

La experiencia de los militares brasileños muestra una cierta continuidad con los planteamientos que habían llevado a los oficiales profesionales, en los años treinta, a plantearse —en Brasil y en otros países de la región— la modernización y el desarrollo como tareas pendientes para que las fuerzas armadas pudieran asumir su función institucional dentro del Estado. Pero ahora los militares se plantean el ejercicio directo del poder, y no simplemente la intervención para modificar la configuración o las actuaciones del gobierno (Stepan, 1971). Por ello, aunque la tentación natural sea ver en el golpe brasileño del 64 el precedente último de los golpes en el Cono Sur —el inmediato de 1966 en Argentina, y los posteriores en Chile y Uruguay (1973) y de nuevo Argentina (1976)—, no puede ignorarse su influencia en golpes de corte progresista como el de Perú (1968).

Si bien se pueden establecer paralelismos con la experiencias de Panamá con Torrijos (1968), Bolivia con el general Torres (1970) o Ecuador (1972), el régimen del general Juan Velasco Alvarado (1968-75) constituye, en bastantes aspectos, el ejemplo más claro de revolución desde arriba ensayada por un gobierno militar en América Latina. Sus precedentes, además del breve régimen militar de corte reformista de 1962-63 —el primer gobierno militar *institucional* en la región—, eran los estudios del Centro de Altos Estudios Militares, en el que participaban técnicos civiles de inclinaciones reformistas, y que a comienzos de la década había denunciado literalmente el poder oligárquico sobre las instituciones del Estado (Cotler, 1991: 456).

Al diagnóstico sobre el arcaísmo económico y social resultante del poder oligárquico se une la conciencia del protagonismo de las fuerzas armadas, reforzada por el fracaso del gobierno de Belaúnde, y espoleada por la sombra de la insurgencia armada, que en la vecina Bolivia toma la forma de la guerrilla de Che Guevara. El ejemplo del régimen militar brasileño, que en 1968 ya estaba consolidando los poderes extraordinarios del presidente y descartando cualquier regreso inmediato a la normalidad institucional, fue probablemente un elemento más: la modernización desde el Estado, impulsada y dirigida por las fuerzas armadas, estaba en el orden del día.

A las dificultades económicas muy reales que debía afrontar, el gobierno de Velasco sumó las crecientes tensiones políticas derivadas de su personalismo —que dividen al ejército y privan a su régimen de potenciales aliados— y, desde 1974, una creciente movilización de las clases medias y de los grupos empresariales, que ven en su propuesta de crear un sector de propiedad social una seria amenaza de transformación socialista de la economía, más allá de las nacionalizaciones iniciales. En agosto de 1975, en una situación de confusión y malestar social, y de enfrentamiento dentro de las fuerzas armadas, Velasco sería depuesto y sustituido por su ministro de la Guerra, Francisco Morales Bermúdez. Esta *segunda fase* de la revolución militar incluiría el giro hacia una política de ajuste —impuesto por la necesidad de hacer frente al pago de la deuda externa—, y una Asamblea Constituyente. En 1980 se convocaron finalmente elecciones, cuyo resultado supuso el regreso de Belaúnde a la presidencia.

Las dos etapas de la revolución militar peruana ejemplifican el cambio que se produce en la política latinoamericana a mediados de los años setenta, con el ascenso de la ortodoxia

neoliberal, el retroceso de las propuestas reformistas —populistas o no— y la derrota definitiva de la ola de insurgencia abierta por la revolución cubana. (Ni la compleja evolución posterior de la guerrilla colombiana, ni fenómenos nuevos, como Sendero Luminoso o el EZLN en Chiapas, pueden considerarse ya parte de aquel ciclo.) Pero donde es quizá más perceptible el contraste entre esos dos tiempos históricos es en Argentina, a partir de una comparación entre los regímenes militares de 1966-73 y 1976-83.

De la intervención militar al terrorismo de Estado

El golpe que desplaza al presidente radical Arturo Illia en 1966 se inscribe en el contexto del nuevo protagonismo militar en la región que ya había ilustrado el golpe brasileño de 1964, y que se vincula a la interpretación de la seguridad nacional impulsada desde Washington a partir de la administración Kennedy. No es casual que el general Juan Carlos Onganía, que encabezaría el golpe militar, hubiera elegido la academia norteamericana de West Point para presentar (en agosto de 1964) su propia concepción del papel del ejército como brazo armado de la Constitución y sometido a ella, pero no a los políticos que encarnan temporalmente el poder (Torre y De Riz, 1991: 122-123).

Pero a la vez el golpe se mueve dentro de la lógica tradicional de las intervenciones militares: ha crecido la insatisfacción con el gobierno de Illia y con la capacidad de los partidos para dar una salida a los problemas nacionales, y los militares deciden desplazar a un presidente cuya elección en 1963 les había sorprendido y al que consideraban carente de autoridad frente a los desafíos del movimiento obrero. Onganía trata de restablecer el orden y la autoridad enfrentándose a los sindicatos y suprimiendo la autonomía de las universidades para purgarlas de doctrinas y enseñantes subversivos, pero tres años más tarde —en mayo de 1969— la toma de la ciudad de Córdoba por obreros y estudiantes revela de forma espectacular la existencia de una fuerte oposición. El cese del ministro Krieger Vasena, responsable de la política económica, es el comienzo de una pérdida de confianza generalizada en Onganía que conduce a su desplazamiento en 1970 por el general Levingston. Un nuevo *cordobazo*, al año siguiente, llevaría al poder al general Lanusse, quien impulsa el proceso de transición que culmina con el regreso de Perón en 1973.

La *revolución argentina* de 1966-73 deja un balance desolador para las fuerzas armadas. Por una parte, el deseo de evitar dividirse sobre la gestión política les ha llevado a delegar en presidentes militares, que se revelan incapaces de cumplir las metas planeadas y finalmente les provocan serias divisiones internas. En segundo lugar, tanto la política represiva como la política económica fracasan, las demandas del movimiento obrero desbordan a un régimen acosado por la herencia inflacionaria de las políticas expansivas, y a esas demandas se une las de una nueva oposición de clase media. Y, por último, las elecciones devuelven el poder —tras el intervalo de presidencia de Héctor Cámpora, en representación del líder exiliado— a su histórico enemigo, el general Juan Domingo Perón.

Por ello, el regreso de los militares a la escena, en 1976, va a estar marcado por el deseo de evitar esos errores, en una situación en la que entienden además que cuentan con un mandato para realizar cirujía mayor. En efecto, el caos que sigue a la muerte de Perón en 1974 provoca una demanda creciente de intervención militar. Y entre las causas de ese caos ocupa un lugar destacado la guerrilla —en especial Montoneros—, a la que Perón había cortejado en el exilio, que se le enfrenta tras el regreso, y a la que la Triple A de Isabel Perón y López Rega ha tratado de liquidar mediante la guerra sucia contra los simpatizantes y militantes de izquierda. La opinión pública no exige sólo que se desplace a un gobierno incapaz, sino sobre todo que se restablezca el orden y se ponga fin a la

violencia.

El resultado, como por desgracia es sabido, fue una represión de alcance y brutalidad inauditos durante los primeros años del Proceso de Reorganización Nacional, de la que son muestra los 9.000 casos documentados de desaparecidos. Los militares tenían el ejemplo de la represión en Chile tras el golpe de 1973, y desarrollaron un modelo de actuación colectivo —no sólo en el aspecto represivo— a la luz del fracaso de su experiencia anterior de delegar el poder y permanecer al margen del gobierno. En esta ocasión las fuerzas armadas asumen institucionalmente la responsabilidad del gobierno y de la represión, de la política económica y del aniquilamiento de la izquierda. Aunque se introduce una división del trabajo entre las diferentes armas —que impide la contención del gasto, en el aspecto económico, por la competencia entre ellas, tanto a nivel local y territorial como entre empresas públicas y sectores de la administración—, el objetivo es claro: que ningún jefe o sector militar pueda eludir los costes de su actuación ni beneficiarse de un eventual fracaso.

El golpe de 1973 en Uruguay constituye otro precedente de terrorismo de Estado, aunque a una escala lógicamente menor. La existencia de la guerrilla de los Tupamaros —aunque ya en la práctica derrotada en 1972—, sumada al 18% de apoyo electoral obtenido por el Frente Amplio en 1971, podría dar una aparente explicación a la acción militar dentro del enfoque de la doctrina de la seguridad nacional. En cambio, en el caso del golpe chileno, y de la represión posterior, pese a la retórica militarista del MIR y de otras agrupaciones menores, es evidente que no existía violencia previa que pudiera justificar la brutalidad de la acción militar (al menos 2000 muertos y 1.200 casos de desaparecidos). Eso nos deja con un aparente misterio: ¿qué explica la crueldad de la represión en Chile?

La explicación más común se refiere a la alta polarización de la sociedad chilena —perceptible especialmente tras el avance electoral de la Unidad Popular en marzo de 1973—, que plantea todos los rasgos de una guerra civil larvada excepto uno: los recursos militares estaban sólo de un lado. Pero esta explicación tiene un claro aspecto psicológico —el miedo como origen de la crueldad—, y parece necesario buscar otros factores. El fundamental puede ser la maduración en los medios intelectuales conservadores de la idea de un error histórico o nudo gordiano que es preciso cortar de raíz para resolver los problemas de orden político y social, y la creencia por tanto en que es posible refundar la sociedad para corregir ese error original.

Ese nudo sería el entrelazamiento de la política y la economía que se produce, en torno a la segunda guerra mundial, en los países que desarrollan una industria para sustituir las importaciones, y que a menudo se identifica con el vago concepto de populismo. En el caso argentino, en particular, la quiebra de la espectacular senda de crecimiento económico exportador que llega hasta la primera guerra mundial, y los problemas recurrentes que reaparecen tras el primer gobierno de Perón, llevan a muchos intelectuales conservadores —o simplemente liberales— a concluir que la demagogia peronista y la industrialización protegida han metido al país en un atolladero sin salida.

Estas ideas, por supuesto, no son nuevas en los años setenta. Lo que es nuevo es el clima general, marcado por una preocupación sobre la ingobernabilidad de las democracias que se traduciría en el informe de Crozier, Huntington y Watanuki (1975) para la Comisión Trilateral, y por la especial desenvoltura del gobierno de Nixon —asesorado por Kissinger— en su política internacional, que deja a sus socios la posibilidad de actuar sin el riesgo de encontrar objeciones morales. Como es nuevo el ascenso de las ideas neoliberales, que en el caso chileno habían llegado al país a través del convenio de la Universidad Católica con la Universidad de Chicago, y se habían plasmado en una propuesta de programa económico (el *ladrillo*) para las elecciones de 1970.

En ese contexto cobra sentido —y verosimilitud— una nueva versión del proyecto refundacional en la que el primer paso es el exterminio físico de la oposición marxista para erradicar el mal de raíz, y el segundo la supresión de la intervención del Estado en la economía para eliminar el entrelazamiento entre política y mercado. La privatización de las empresas públicas, la eliminación de subsidios y de todo tipo de política social que pueda dar origen a demandas económicas al Estado, permitirán que la lógica del mercado sea la única que actúe en la esfera económica, evitando la distorsión y la ineficiencia de ésta por la lógica electoral o populista. Eliminados tanto los mecanismos como los protagonistas del proyecto históricamente erróneo, será posible que las cosas vuelvan a su orden natural.

A fin de cuentas no es fácil saber tampoco en qué medida la disponibilidad de este marco de ideas es un factor explicativo del ascenso del terror militar en los años setenta, aunque la afinidad electiva de las ideas neoliberales con el proyecto refundacional parezca evidente. Es muy posible que la causa última de la cruel brutalidad de las dictaduras militares del Cono Sur fuera la ambición y la carencia de escrúpulos de sus protagonistas, y que las ideas sólo pesaran después, a la hora de justificar sus actuaciones —o las de los profesionales y técnicos que les sirvieron—, al igual que otras coartadas ideológicas más usuales como la defensa de la civilización cristiana o el deseo de evitar la expansión del comunismo. Pero es posible al menos que la disponibilidad de estas ideas reforzara la radicalidad de la acción militar.

El hecho es que con el golpe y la dictadura del general Pinochet la intervención militar pasó a tener unas connotaciones especialmente sangrientas y a asociarse con las políticas neoliberales. Este segundo aspecto —que inicialmente puede haber sido decisivo para que el gobierno de Raúl Alfonsín descartara las reformas neoliberales frente a la crisis de la deuda— cambiaría en la década posterior cuando los gobiernos democráticos debieron asumir tales políticas para sobrevivir en el marco de la nueva economía globalizada bajo la doble presión de la deuda externa y de las condiciones impuestas por los mercados de capitales. Pero las connotaciones represivas han perdurado, y, al menos hasta el presente, han actuado como un elemento de suficiente peso en el imaginario colectivo de estos países como para superar la vieja tentación de los actores sociales y políticos de recurrir a las fuerzas armadas ante un resultado insatisfactorio de los gobiernos.

De Centroamérica a las Malvinas: el retorno al poder civil

El retorno a los regímenes democráticos en el Cono Sur, y el actual momento histórico en el que las intervenciones militares parecen ausentes del horizonte en América Latina, tienen en buena medida un origen paradójico: la obsesión del presidente Reagan por abatir al gobierno sandinista instalado en Nicaragua tras la revolución de 1979, combinada con la decisión del general Galtieri, en abril de 1982, de recuperar las islas Malvinas para la soberanía argentina mediante el uso de la fuerza. Hasta la guerra de las Malvinas, la administración Reagan había desarrollado una política de entendimiento de facto con los regímenes autoritarios del Cono Sur, pero a la vez había mantenido una retórica de defensa de la democracia que no permitía contemplar positivamente intervenciones militares contra gobernantes electos.

La razón era que el acoso al régimen sandinista se basaba en su supuesto carácter totalitario, no en el contenido de su política, y por tanto el discurso que legitimaba la actuación de Washington era un discurso prodemocrático. Por ello quedaba descartada una ruptura abierta con la defensa de los derechos humanos que había guiado la política exterior de la administración Carter, y las coincidencias y simpatías hacia los gobiernos militares debían mantenerse con una cierta discreción. De hecho, por coherencia dentro de

la actuación contra el régimen de Nicaragua, la administración continuó impulsando la formación de gobiernos civiles en Centroamérica. La presión norteamericana explica en buena medida la convocatoria de asambleas constituyentes en El Salvador (1982) y Guatemala (1984), y la realización de las elecciones que llevan a la presidencia de estos países a José Napoleón Duarte (1984) y Vinicio Cerezo (1985).

Ya en 1981 se había producido la formación de un gobierno civil en Honduras con la elección del presidente Roberto Suazo, pero la importancia de la ayuda militar norteamericana, y, sobre todo, la ausencia de guerra civil, hacían sin duda más sencillo el proceso. Muy diferente era la situación en El Salvador y Guatemala, ya que el enfrentamiento con la guerrilla otorgaba fuerte protagonismo a las fuerzas armadas y creaba oportunidades muy favorables para que éstas recibieran apoyo y comprensión del ejército norteamericano, frente a las posibles reticencias del Departamento de Estado. Sin embargo, las garantías sobre el mantenimiento de su papel *tutelar*, y la sustancial dependencia respecto a la ayuda norteamericana, se tradujeron en progresivas concesiones al realismo por parte de las fuerzas armadas de ambos países, que finalmente llevarían a los acuerdos de paz en El Salvador (Chapultepec, 1992) y Guatemala (1996).

El apoyo prestado a la política exterior norteamericana frente a Nicaragua llevó a la Junta Militar argentina a esperar reciprocidad de Washington en su intervención en las Malvinas. Aunque esta esperanza parezca ahora descabellada, no carecía completamente de fundamento. En sus memorias Reagan afirma haber tratado de disuadir a Thatcher de una victoria total, ante el temor de que la humillación de la Junta pudiera conducir a su derrocamiento por la guerrilla izquierdista (cit. en Pastor, 1992: 80). Thatcher, mejor informada o menos preocupada ante tal posibilidad, no parece haberle tomado muy en serio en esta ocasión.

El catastrófico resultado de la aventura de las Malvinas fue sin duda el factor que precipitó la salida de la Junta y el regreso en 1983 de la democracia a Argentina. Este hecho puede haber introducido una dinámica de dominó en los regímenes del Cono Sur, sobre todo si se recuerdan las dificultades económicas que marcan la década, y que erosionan fuertemente la credibilidad de los gobernantes militares. Ahora bien, en el caso chileno la transición se produce una vez que se han superado las principales secuelas de la crisis de 1982-84, que en su momento había dado un importante impulso a la oposición, creando las condiciones para su unidad ante el plebiscito de 1988 y después para los gobiernos de la Concertación que se han sucedido desde 1989. De hecho el calendario de la transición chilena viene marcado por la Constitución de 1980, no por los acontecimientos políticos externos o internos.

Sin embargo, además de la unidad de la oposición existe otro factor decisivo, *externo*, para explicar el desenlace del plebiscito y de la victoria del *no*. El Departamento de Estado, y la Embajada de Estados Unidos en Santiago, emitieron señales claras de que esperaban que el resultado del plebiscito fuera respetado, y ya tenían estudiadas las posibles sanciones a aplicar en caso de que no fuera así. Tales preferencias pueden haber sido un factor importante en la larga noche del plebiscito, cuando el almirante Merino y los generales Matthei y Stange dejaron sólo a Pinochet en su pretensión de ignorar la victoria del *no* y asumir plenos poderes (*La Tercera*, 14 de noviembre de 2000). El aislamiento de la Junta —en un contexto de restauración generalizada de la democracia en el Cono Sur— habría sido completo.

Así, el giro prodemocrático de la política exterior norteamericana es un factor de bastante peso para explicar los procesos de retorno a la democracia en los años ochenta, así como el clima adverso a las intervenciones militares en la década siguiente. Cuando en enero de 2000 estuvo a punto de producirse un golpe militar en Ecuador, ante las protestas indígenas

y populares en contra de la política económica del presidente Mahuad, la embajada norteamericana avisó de forma inmediata de las consecuencias muy negativas que esto tendría para el país. Este hecho puede haber pesado tanto en la decisión de Mahuad de aceptar su sustitución por el vicepresidente Noboa como en la del general Carlos Mendoza de retirarse del triunvirato formado para asumir el poder (*El Comercio*, 22 de enero de 2000).

Resulta sin duda paradójico que este giro de la política norteamericana tuviera sus efectos más espectaculares durante la presidencia de Ronald Reagan, que no era precisamente un creyente en la ética de los derechos humanos como su antecesor, el presidente Carter, y más aún que el factor decisivo de la aplicación coherente de una línea a favor de la democracia y el gobierno civil fuera la obsesión por derrocar al gobierno sandinista. También resulta notable que esta obsesión fuera resultado de una aceptación a pies juntillas de la doctrina Kirkpatrick sobre la imposibilidad de derrotar por medios democráticos a regímenes *totalitarios* como el sandinista: al parecer la administración Bush se vio totalmente sorprendida cuando Daniel Ortega reconoció su derrota electoral en 1990 (Pastor, 1992: 88).

Pero el hecho es que la dimensión internacional, que desempeñó un papel decisivo en la formación de gobiernos militares en la década de los sesenta, y después en la generalización del terrorismo de Estado en el Cono Sur, sería también un factor clave para que esta tendencia se invirtiera en la década de los ochenta, y ha venido disuadiendo de nuevas intervenciones hasta el momento presente. Ahora bien, al menos en el Cono Sur parece obvio que se ha producido otra transformación sustancial, y ésta de orden interno: los atroces resultados de las dictaduras en términos de sufrimientos y violación de los derechos humanos han vacunado a la sociedad y a los partidos políticos contra la tentación de recurrir al actor militar para compensar resultados electorales insatisfactorios o para desplazar gobiernos desacreditados.

Esta tentación es el hilo que une las intervenciones militares de los años treinta con el ascenso de gobiernos institucionales de las fuerzas en los años sesenta. Pero la polarización ideológica surgida a partir de la revolución cubana, y del ascenso de la doctrina de la seguridad nacional a partir de la administración Kennedy, llevaron a las pesadillas que marcan los años ochenta: las guerras civiles en Centroamérica y las Juntas terroristas del Cono Sur. El deseo de evitar su repetición es hoy probablemente el factor interno más disuasivo contra un posible regreso de los militares a la esfera política.

No convendría sin embargo exagerar el optimismo. Por una parte, las fuerzas armadas conservan un papel tutelar, en diferentes sentidos, tanto en Chile como en Centroamérica —con la sabida excepción de Costa Rica—, y este condicionamiento no es menor cuando es puramente informal o permanece latente. Por otra parte, las reformas económicas han provocado un claro debilitamiento del Estado en muchos países, a la vez que crecía el malestar social. Donde no ha existido una experiencia reciente de gobierno militar, como en Venezuela, surge fácilmente la tentación de ver en un hombre del ejército —un golpista frustrado, a fin de cuentas— la posible alternativa a unos partidos descreditados. ¿En qué medida se puede contar con la dimensión internacional para evitar que la frustración social lleve a una reaparición del actor militar?

Por último conviene recordar que en la política internacional norteamericana hay tendencias contradictorias. No es nada evidente que el Plan Colombia contra el narcotráfico no pueda derivar en un enfrentamiento civil, habida cuenta de los nexos con el narcotráfico que mantienen tanto la guerrilla de las FARC como los paramilitares de Castaño. En Colombia ya existen de hecho, independientemente de la voluntad de paz de su gobierno, todas las condiciones para un enfrentamiento como los que devastaron Nicaragua, Guatemala y El

Salvador durante años. La posibilidad de una evolución de este tipo plantea riesgos inquietantes para la estabilidad de los gobiernos democráticos no sólo en Colombia, sino también en los países limítrofes, ya que una vez que los militares adquieren un protagonismo prolongado no es fácil evitar su presión en la toma de decisiones. Quizá, sin embargo, tampoco sea bueno exagerar el pesimismo.

Referencias

Abrahamsson, B. (1972), *Military professionalization and political power*, Beverly Hills: Sage.

Cotler, J. (1991), "Peru since 1960", en L. Bethell, comp., *Cambridge History of Latin America*, vol. 8, *Latin America since 1930: Spanish South America*, 451-507, Cambridge: Cambridge University Press.

Crozier, M.J., Huntington, S.P., y Watanuki, J. (1975), *The crisis of democracy: report on the gobernability of democracies to the Trilateral Commission*, Nueva York: New York University Press.

Dahl, R.A. (1971), *Polyarchy: participation and opposition*, New Haven: Yale University Press [*La poliarquía: participación y oposición*, Madrid: Tecnos, 1989].

Dunkerley, J. (1990), "Guatemala since 1930", en L. Bethell, comp., *Cambridge History of Latin America*, vol. 7, *Latin America since 1930: Mexico, Central America and the Caribbean*, 211-249, Cambridge: Cambridge University Press.

Finer, S.E. (1962), *The man on horseback: the role of the military in politics*, Boulder: Westview, 2ª ed. 1988.

Finer, S.E. (1975), "State- and nation-building in Europe: the role of the military", en C. Tilly, comp., *The formation of national states in western Europe*, 84-163, Princeton: Princeton University Press.

Frank, A.G. (1967), *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*, 3ª ed., Buenos Aires: Siglo XXI, 1974 [*Capitalism and underdevelopment in Latin America*, Nueva York: Monthly Review Press].

Frank, A.G. (1969), *Subdesarrollo o revolución*, México: Era, 1972 [*Underdevelopment or revolution*, Nueva York: Monthly Review Press].

Lipset, S.M. (1959), "Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy", *American Political Science Review* **53**: 69-105.

Huntington, S.P. (1957), *The soldier and the state: the theory and politics of civil-military relations*, Cambridge: Belknap Press.

Huntington, S.P. (1968), *Political order in changing societies*, New Haven: Yale University Press [*El orden político en las sociedades en cambio*, Buenos Aires: Paidós, 1990].

Linz, J.J. (2000), *Totalitarian and authoritarian regimes*, Boulder: Lynne Rienner.

Myers, D.J., y O'Connor, R.E. (1998), "Support for coups in democratic political culture: a Venezuelan exploration", *Comparative Politics* **30**: 193-212.

O'Donnell, G. (1972), *Modernización y autoritarismo*, Buenos Aires: Paidós [*Modernization and bureaucratic authoritarianism: studies in South American politics*, Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1973].

O'Donnell, G. (1996), "Otra institucionalización", en *Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, 305-330, Buenos Aires: Paidós, 1997 ["Illusions about consolidation", *Journal of Democracy* **7** (2): 34-51].

Pastor, R.A. (1992), *Whirlpool: US foreign policy toward Latin America and the Caribbean*, Princeton:

Princeton University Press.

Rostow, W.W. (1960), *Las etapas del crecimiento económico*, México: Fondo de Cultura Económica, 1961 [*The stages of economic growth*, Cambridge: Cambridge University Press].

Rouquié, A. (1982), *El Estado militar en América Latina*, México: Siglo XXI, 1984 [*L'état militaire en Amérique Latine*, París: Le Seuil].

Rouquié, A. (1994), "The military in Latin American politics since 1930", en L. Bethell, comp., *Cambridge History of Latin America*, vol. 6 (2), *Latin America since 1930: politics and society*, 233-304, Cambridge: Cambridge University Press.

Stepan, A. (1971), *The military in politics: changing patterns in Brazil*, Princeton: Princeton University Press.

Thorp, R., comp. (1984), *América Latina en los años treinta: el papel de la periferia en la crisis mundial*, México: Fondo de Cultura Económica, 1988 [*Latin America in the 1930s: the role of the periphery in world crisis*, Londres: Macmillan].

Torre, J.C., y De Riz, L. (1991), "Argentina since 1946", en L. Bethell, comp., *Cambridge History of Latin America*, vol. 8, *Latin America since 1930: Spanish South America*, 73-193, Cambridge: Cambridge University Press.

Wiarda, H.J., comp. (1974), *Politics and social change in Latin America: still a distinct tradition?*, 2ª ed., Boulder: Westview, 1992.

Wiarda, H.J., y Kline, H.F., comps. (1979), *Latin American politics and development*, 2ª ed., Boulder: Westview, 1990.

Publicado en *Historia y Política*, **5**: 7-27, 2001.

[CSIC] [UPC] [Documentos de Trabajo]